

# MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

**16436** *ORDEN APU/3017/2004, de 16 de septiembre, por la que se constituye la comisión para el estudio y preparación del anteproyecto de Ley de Agencias Públicas.*

Un elemento esencial en la gestión de servicios públicos es profundizar en una nueva cultura de gestión que se apoye en el cumplimiento de objetivos claros y que pueden ser medidos, orientada a la mejora en la prestación del servicio, de la que se deriven ventajas para los usuarios y para los contribuyentes. Por ello, se ha considerado necesario abordar el estudio de Agencias Administrativas que den respuesta a estas exigencias.

En primer lugar resultaría conveniente el fortalecimiento de los mecanismos de la responsabilización por objetivos en la gestión pública, configurando las agencias como organizaciones dotadas de capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de nivel de autonomía en su funcionamiento como premisas necesarias para que se les pueda exigir una responsabilidad objetiva sobre el cumplimiento de los objetivos que las mismas tienen asignados.

Por otra parte con esta nueva fórmula organizativa ha de ponerse en práctica un sistema de evaluación de la gestión más fácil y eficaz que el actual.

Por último otra de las premisas fundamentales ha de ser posibilitar la integración y concentración de servicios públicos que puedan estar dispersos en distintos Ministerios o políticas con gran impacto sobre los ciudadanos y que exigen una plena coordinación con otras Administraciones. La creación de estas agencias, en las que puedan incorporarse las Comunidades Autónomas tendría además la ventaja de permitir una eficaz vertebración en la prestación de servicios «multiadministración».

Para llevar a cabo los análisis y estudios previos a la elaboración de los anteproyectos de leyes de creación de estas Agencias se constituye la Comisión formada por expertos en las áreas de relevancia.

En función de todo lo anterior, y en su virtud y uso de las facultades atribuidas en los artículos 12 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo:

**Primero. Creación.**—Se constituye la Comisión para el estudio y preparación del anteproyecto de Ley de Agencias Públicas, como grupo de trabajo de los regulados en el artículo 40, apartado tercero, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

**Segundo. Cometido.**—La Comisión tendrá como objeto el estudio y el diagnóstico sobre la situación de los organismos públicos en nuestro país para determinar las necesidades de nuevas estructuras organizativas, así como las necesidades normativas más deseables para la puesta en funcionamiento de las Agencias Públicas Estatales.

Como resultado de sus trabajos, la Comisión presentará al Ministro de Administraciones Públicas, en el plazo de tres meses desde su constitución, un primer texto o borrador del correspondiente anteproyecto de ley.

**Tercero. Composición.**—Estará compuesta por el Presidente y los Vocales que a continuación se designan:

Presidente: D. Luciano Parejo Alfonso.  
Vocales: D. Josep Aldomá Buixadé.  
D. Manuel Ballbé Mallol.  
D. José Juan Blasco Lang.  
D. Antonio Descalzo González.  
D. Fernando Díaz de Liaño y Argüelles.  
D. Koldo Echevarría Ariznavarreta.  
D. Antonio Embid Irujo.  
D. Manuel Escudero Zamora.  
D. Carlos Galindo Meño.  
D. Domingo Hernández Tudela.  
D. Vital Lobo García.  
D. Ángel Manuel Moreno Molina.

D. Juan Luis Paniagua Soto.  
D. Carles Ramió Matas.  
D. José Luis Redondo Pérez.  
D. Francisco Vanaclocha Bellver.

La Comisión contará con un Secretario que será designado por el Presidente de entre los miembros de la misma.

**Cuarto. Funcionamiento.**—Para dar cumplimiento de sus cometidos, el Presidente de la Comisión establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen fin de la Comisión.

La Comisión podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la sede del Instituto Nacional de la Administración Pública y mantener reuniones con autoridades, otros expertos nacionales e interlocutores sociales.

**Quinto. Infraestructura y medios.**—El Instituto Nacional de Administración Pública, Organismo Autónomo adscrito a la Secretaría General para la Administración Pública, será el encargado de proveer de los medios materiales y personales requeridos por la Comisión.

Los miembros de la Comisión percibirán las indemnizaciones que les correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio.

**Sexto. Entrada en vigor.**—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.

SEVILLA SEGURA

**16437** *ORDEN APU/3018/2004, de 16 de septiembre, por la que se constituye la comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público.*

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 103, apartado tercero, que «la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».

Un Estatuto, con tal denominación y como texto único, no se ha aprobado hasta la fecha, por lo que se hace preciso, transcurridos ya más de veinticinco años desde la promulgación de la Constitución, cumplir con el mencionado mandato constitucional.

El Estatuto se percibe como un instrumento legislativo necesario para poder contar con unas Administraciones Públicas plenamente adaptadas a las complejas exigencias sociales a las que deben responder, permitiendo articular, a su vez, las necesidades del ciudadano en la sociedad actual con las propias exigencias organizativas de la Administración.

Los cambios experimentados en los últimos años debido a cuestiones como los procesos de internacionalización y globalización o de descentralización del Estado, el papel del ciudadano como sujeto activo que demanda servicios públicos de calidad, los cambios tecnológicos o la participación activa de numerosos actores sociales en el devenir administrativo, exigen la introducción de nuevos instrumentos legislativos que puedan dar respuesta a esa realidad.

Asimismo, debe producirse un paulatino cambio de cultura administrativa hacia una nueva cultura de gestión de los servicios públicos en la línea de los principios inspiradores de la gobernanza, entendiéndose ésta como el modo de gestión característico de nuestra era: principio de la apertura y la transparencia, de la participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

Así pues, el Estatuto tendrá como uno de sus objetivos principales configurar una serie de principios y reglas comunes en torno a los cuales las distintas organizaciones públicas encuadren sus respectivas políticas de recursos humanos, dando así coherencia al sistema, pero permitiendo a la vez que esos principios y reglas sean lo suficientemente amplios para que el desarrollo de los mismos permita resolver a cada Administración sus particulares necesidades organizativas.

Para llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la elaboración de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del anteproyecto de estatuto, se constituye la Comisión formada por expertos en las áreas de relevancia.

En función de todo lo anterior, y en su virtud y uso de las facultades atribuidas en los artículos 12 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo:

Primero. *Creación.*—Se constituye la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, como grupo de trabajo de los regulados en el artículo 40, apartado tercero, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Segundo. *Cometido.*—La Comisión tendrá como objeto el estudio y el diagnóstico sobre la situación del empleado público, así como de las alternativas normativas idóneas para la elaboración de un borrador del futuro Estatuto Básico.

Como resultado de sus trabajos, la Comisión rendirá un informe al Ministro de Administraciones Públicas, en el plazo de seis meses desde su constitución.

Tercero. *Composición.*—Estará compuesta por el Presidente y los Vocales que a continuación se designan:

Presidente: D. Miguel Sánchez Morón.  
 Vocales: D. José Ignacio Cases Méndez.  
 D. Federico Castillo Blanco.  
 D. Ángel Criado Herrero.  
 D. Fernando Díaz de Liaño y Argüelles.  
 D. Carlos Galindo Meño.  
 D. Pedro Guillén Marina.  
 D. Rafael Jiménez Asensio.  
 D. Francisco Longo Martínez.  
 Dña. Julia Marchena Navarro.  
 D. Aldo Olcese Santonja.  
 D. Luis Ortega Álvarez.  
 D. Salvador del Rey Guanter.  
 D. Tomás Sala Franco.  
 Dña. Sara Ugarte Alonso-Vega.  
 D. Vicente Vigil Pacheco.

La Comisión contará con un Secretario que será designado por el Presidente de entre los miembros de la misma.

Cuarto. *Funcionamiento.*—Para dar cumplimiento de sus cometidos, el Presidente de la Comisión establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen fin de la Comisión.

En su funcionamiento, la Comisión seguirá un esquema participativo, articulando los instrumentos necesarios para la participación de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, organizaciones sindicales y otras organizaciones representativas. Para ello, podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la sede del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Quinto. *Infraestructura y medios.*—El Instituto Nacional de Administración Pública, Organismo Autónomo adscrito a la Secretaría General para la Administración Pública, será el encargado de proveer los medios materiales y personales requeridos por la Comisión.

Los miembros de la Comisión percibirán las indemnizaciones que les correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio.

Sexto. *Entrada en vigor.*—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.

SEVILLA SEGURA

## MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

**16438** RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2004, del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, por la que delega el ejercicio de competencias en órganos de dicho Centro Nacional.

Por Resolución de 8 de septiembre de 2004 de la Secretaria General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo fueron asignadas transitoriamente al Director del Instituto de Salud Carlos III las funciones atribuidas al Director del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el fin de conseguir la máxima agilidad y eficacia en el funcionamiento del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, esta Dirección resuelve delegar en el Coordinador Nacional de Trasplantes Adjunto el ejercicio de las siguientes competencias exclusivamente referidas al citado Centro:

1. La autorización de las Comisiones de Servicio con derecho a indemnización.
2. La aprobación y compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago en los expedientes de contratación administrativa y de convenios por importe inferior a 60.000 €.
3. El compromiso de gasto, reconocimiento de obligación y ordenación del pago de expedientes de contratación administrativa y de convenios, previamente autorizados, por importe superior a 60.000 €.
4. La devolución e incautación de las garantías provisionales constituidas en los procedimientos de contratación así como la incautación, devolución o cancelación de las garantías definitivas y en su caso complementarias y especiales exigibles para la celebración de contratos.
5. La autorización, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro para becas y bolsas de viaje por importe inferior a 60.000 €.
6. La autorización, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de obligaciones con cargo al Capítulo I del Centro.
7. La selección y nombramiento del personal eventual y, en general, las competencias en relación con el personal laboral atribuidas por la legislación vigente y por el Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado.
8. La aprobación de las cuentas justificativas gestionadas por el sistema de pagos a justificar y de anticipos de caja fija, aprobación de reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto de dichos anticipos.
9. La Presidencia de la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
10. Las funciones y competencias del Coordinador Nacional de Trasplantes establecidas en el artículo 19 del RD 2070/1999, de 30 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.

La delegación de competencias que se realiza en esta resolución se entiende sin perjuicio de la posibilidad de avocación para sí del órgano otorgante, en cualquier momento, del conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en ella se consideren oportunos de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/92, ya citada.

Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las competencias delegadas en virtud de la presente resolución deberán hacer constancia expresa de esta circunstancia y su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La presente resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.—El Director, P. S. (Resolución del Secretario General de Sanidad de 8/9/2004), el Director del Instituto de Salud Carlos III, Francisco Gracia Navarro.

## BANCO DE ESPAÑA

**16439** RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2004, del Banco de España, por la que se hace pública la inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Fortis Lease Ibérica, E.F.C., S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, se procede a la publicación de la siguiente alta en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito.

Con fecha 26 de agosto de 2004 ha sido inscrito en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Fortis Lease Ibérica, E.F.C., S.A., con el número de codificación 8822, N.I.F.: A84079888, y domicilio social en calle José Ortega y Gasset, 29, pl. 6, 28006 Madrid.

Madrid, 2 de septiembre de 2004.—El Director General, José María Rolán Alegre.